

**BYTE 73 - Temporal mayo 2001 (10/04/2001)**

## **PIRATERIA INFORMÁTICA**

*Miquel Barceló*

Como ya he contado otras veces, mis estudiantes me proporcionan a menudo informaciones interesantes. En mi asignatura sobre "*Impacto social y ética profesional de la informática*" tratamos de diversos temas en torno a la sociedad de la información y, también, sobre la profesión informática. Parte de la asignatura la desarrollan los mismos alumnos que eligen un tema de entre los muchos propuestos, lo elaboran y presentan en las clases de prácticas.

Generalmente, los primeros temas de esas clases de prácticas tratan de las leyes que afectan más directamente a la informática: la LPDP que protege la intimidad personal y, también, las leyes que protegen la propiedad privada del software. De este último tema, y de alguna de sus consecuencias, quisiera hablar aquí.

Vaya por delante que mi punto de vista es siempre la defensa del necesario respeto a los autores del software. Por desgracia, los estudiantes de informática suelen usar software no siempre legalmente adquirido. Es importante hacerles reflexionar sobre lo que esa mala práctica representa, es bueno recordarles que existen licencias especiales para estudiantes y que, sobre todo, la actividad de los piratas informáticos perjudica a todos y, muy principalmente, a quienes, como ellos, van a dedicarse muy pronto a construir software con el que, lícitamente, merecen ganarse la vida.

Pues bien, este cuatrimestre, Sergi Díaz y David Ortega completaron su interesante trabajo y exposición de las leyes españolas sobre "Protección de la propiedad privada del software" con una referencia a los datos y actividades que, sobre la piratería informática, da la BSA (*Business Software Alliance*). Se trata de una asociación creada en 1988, con presencia hoy en 65 países, y que representa a los principales desarrolladores de software comercial del mundo como, por ejemplo, Microsoft, Novell, Adobe Systems, Apple, Corel, Lotus, Macromedia, Symantec y varios más.

Aunque se puede obtener mayor información en su página web española ([www.bsa.org/es](http://www.bsa.org/es)), los principales objetivos de la BSA, que se autodenomina como "la voz de la industria del software", son: educar a los consumidores acerca del hecho de que pagar por el software redunda en beneficios para la economía del país; emprender acciones legales contra los que incumplen la ley; y promover legislaciones nacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual en el campo del software.

Hasta ahí, me parece una acción lícita de una empresa privada. (BSA es una entidad privada, sin ánimo de lucro, aunque, evidentemente ha de perder prácticamente todo el dinero que las empresas miembros de la organización entregan gustosos por el beneficio que les pueda a reportar la disminución de la piratería informática). Aunque debo decir, de pasada, que siempre me han sorprendido las cifras que se citan sobre la piratería informática, ya que nunca he podido comprender la metodología científica de esos supuestos estudios que pretenden conocer cuánto software pirata hay y, por si ello fuera poco, las exactas pérdidas económicas que ello ha de representar.

Lo que ya no me gustó tanto fue confirmar con datos una especie de campaña, un tanto mafiosa en su estilo, que la BSA ha desarrollado recientemente, al menos en España. Aunque hace unos meses ya me habían hablado de esa campaña, esta vez mis estudiantes han conseguido copia de algunas de las cartas que la BSA ha enviado a muchas empresas anunciando una unilateral "*Campaña de Legalización de Software*" que consta, en un hábil crescendo, de diversas cartas y telegramas más bien intimidatorios.

La primera carta, al menos en la oleada de la que dispongo de datos (sé que hay otras), se envió el 11 de septiembre de 2000, anunciando a diversas empresas esa campaña para legalizar el software. Fue seguida, en el caso de no haber proporcionado voluntariamente los datos que se solicitaban (sin ninguna autoridad legal, dado el carácter privado de la BSA), por una segunda carta con fecha 13 de noviembre de 2000 en términos ya claramente amenazadores, redactados, eso sí con la habilidad que caracteriza a un buen abogado como es Carlos Pérez, uno de los asesores legales de la BSA y de quien me consta su capacidad técnica en el difícil campo de los aspectos legales de la informática.

Entiendo las razones de la BSA, pero no me parece un procedimiento muy correcto. Algunos de los textos de las cartas o telegramas, recordando aspectos del Código Penal, posibles multas de hasta 36 millones de pesetas y penas de hasta cuatro años de prisión, me resultan claramente intimidatorios. Muchos pequeños empresarios se van a llamar a engaño y considerarán oficial una campaña que, como bien sabe la BSA, es sólo voluntaria dado el carácter privado de la organización que solicita esos datos, presuntamente para "legalizar el software".

Acepto que la piratería informática es mala y estoy en contra de ella. Pero también estoy en contra de métodos que, aun no siéndolo legalmente, parecen claramente mafiosos en su proceder y amenazadores en algunos de sus contenidos. Sinceramente, no creo que este procedimiento adoptado por la BSA sea correcto ni siquiera para obtener el loable objetivo que se persigue. Un buen fin no justifica unos malos medios.